

## ¿Nueva Constitución o nueva constitucionalidad (revisión integral del texto)?

*Javier Brown César*

Palacio Nacional, 5 de febrero de 2001. En el LXXXIV Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y después de un breve recuento de nuestra historia constitucional independiente, Vicente Fox afirmaba –aparentemente con contundencia y convicción– que: “¡Cada Constitución ha señalado el principio de un ciclo histórico!”.<sup>1</sup> A continuación remarcó que desde el 2 de julio de 2000 “nuestro país ingresó en una nueva etapa que representa la culminación de una larga historia de esperanzas y sacrificios que marca a su vez el inicio de una tarea histórica: la de concretar la transición política en una profunda reforma del Estado que actualice el instrumental jurídico que fue diseñado para una realidad política ya rebasada”.

Fox continuó el hilo de su argumentación: si las razones para convocar al Congreso Constituyente de 1916 (que elaboró la Constitución vigente) fueron que la anterior Carta Magna de 1857 había sufrido modificaciones en 49 artículos, entonces parece necesario crear una nueva arquitectura constitucional, ya que nuestra Constitución ha sufrido alrededor de 400 reformas, “cerca de la mitad promovidas durante los últimos tres gobiernos”. La consecuencia de estos argumentos parece lógica: hay que convocar a un nuevo Congreso Constituyente que elabore una nueva Carta Magna para dar inicio a una nueva época. Pero la propuesta de Fox de realizar una revisión integral traicionó las ambiciosas premisas de sus argumentos y las esperanzas de

---

<sup>1</sup> El discurso se puede consultar en: [www.presidencia.gob.mx/?art=460&orden=Leer](http://www.presidencia.gob.mx/?art=460&orden=Leer). Éste también se reproduce en *La Jornada*, en Internet, del 6 de febrero de 2001: [www.jornada.unam.mx/2001/feb01/010206/renovar.html](http://www.jornada.unam.mx/2001/feb01/010206/renovar.html)

quienes creían que con esta administración se daban pasos firmes y decididos en favor de un México diferente.

6 de febrero de 2001. Los encabezados de algunos diarios anunciaban la elaboración de una nueva Constitución. Así, se leía en *Excélsior*: “Debate Nacional para elaborar una nueva Constitución, propone Fox”.<sup>2</sup> Estamos ante un ejemplo más de cómo la fantasía puede superar a la realidad: los medios de masas crean realidades alternativas,<sup>3</sup> alteradas y noticiables, que se pueden “vender o proporcionar selectivamente” a determinadas “audiencias cautivas”.

Al día siguiente (el 7 de febrero), la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación desmintieron rápidamente estas afirmaciones. Martha Sahagún, vocera de la Presidencia, y Juan de Dios Castro Lozano, consejero jurídico de la misma dependencia, negaron que Fox pretendiera convocar a un Congreso Constituyente “para discutir y aprobar una nueva Constitución”, mientras que Santiago Creel, secretario de Gobernación, anunció una reforma constitucional por consenso y la posibilidad de instalar un buzón permanente para que los ciudadanos “expongan sus puntos de vista”. Académicos como Carpizo descartaron la posibilidad de elaborar una nueva Constitución.

Hasta aquí la confusión y los juegos de palabras entre el poder público y los medios masivos. En este corto debate, el ciudadano común estuvo ausente, ¿qué significado puede tener para él la revisión de la Constitución o la elaboración de una nueva Carta Magna?, ¿por qué es tan importante nuestra Constitución Política y por qué no se quiere hacer una nueva ley suprema?, ¿qué es y para qué sirve una Constitución y qué pasaría si cambiamos nuestra Constitución? Ni Fox, ni Creel, ni quienes ahora ocupan posiciones políticas estratégicas nos han hablado acerca de ello. El debate sobre nuestra Constitución ha tomado un cauce, digamos, meramente jurídico: la discusión se llevará al nivel de la técnica constitucional, a partir de grupos

<sup>2</sup> Véase [www.excelsior.com.mx/0102/010206/](http://www.excelsior.com.mx/0102/010206/)

<sup>3</sup> Véase Niklas Luhmann, *La realidad de los medios de masas*, México, UIA-Anthropos, 2000, pp. 111 ss.

## ¿Nueva constitución o...

cerrados de expertos que, mediante juegos de lenguaje altamente sofisticados, filtrarán las necesidades humanas de orden político, traduciéndolas en una ingeniería constitucional selectiva, funcionalista.

Si se revisa la Constitución quizá se podría garantizar la superación de ciertas contradicciones legales, adecuando el marco normativo a los nuevos tiempos mundiales, pero las relaciones de poder, los consensos fundamentales, así como la estructura del Estado mexicano y los derechos ciudadanos seguirían siendo, en el fondo, los mismos: con el nuevo constitucionalismo tal vez se logre que nuestra Constitución sea la norma suprema de la Nación, pero no que sea una ley más justa y, sobre todo, comprometida con el bienestar del pueblo, antes que con la caprichosa voluntad de sus gobernantes. Por el contrario, la elaboración de una nueva Constitución llevaría a revisar a fondo los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, así como la estructura del Estado mexicano y quizá implique cambios fundamentales en nuestro sistema político y en la forma como se relaciona el gobierno con la sociedad civil (lo que difícilmente sucedería si sólo se revisa el texto constitucional).

## 1. Estado, sistema político y régimen

### *1.1. Estado y sistema político*

Efectivamente, estamos ante un nuevo orden político, pero nuestro problema es definirlo. Después de 71 años de gobiernos autoritarios, excluyentes, paternalistas y patrimonialistas, nos encontramos en lo que algunos han llamado transitocracia: un estado de cambio político en el que sabemos de dónde venimos, pero no tenemos la claridad para decir y decidir a dónde queremos ir. Quizá el mayor riesgo implícito en este nuevo orden político de transición es la posibilidad de que quienes decidan a dónde queremos ir no sean los “ciudadanos soberanos”, sino las élites en diálogo con grupos de interés poderosos.

En estos momentos de cambio, confusos e inciertos para muchos de nosotros, la desvinculación que se está dando entre partido en el gobierno, Estado, nación y sistema político aca-

rea nuevos problemas. El debate se ha centrado en torno a dos opciones, que parecen excluirse: por un lado, el Estado mínimo, limitado a ser guardián de los intereses del gran capital, desvinculado del sistema de las necesidades sociales y de los imperativos de justicia; por otro lado, el Estado benefactor y providencialista, que amplía su esfera de acción a la protección y salvaguarda del ciudadano hasta el límite de hacer desaparecer a la ciudadanía detrás de la figura de cliente demandante de servicios públicos. Pero ¿y qué sucedería si el Estado como tal hubiera desaparecido?

Parece que ya no hay razón para promover más políticas de Estado, por lo menos en el sentido restringido como solían definirse tradicionalmente: como la suma de voluntades de Federación, estados y municipios; las nuevas políticas de Estado, si es que se han de conservar, deben convocar también a los ciudadanos. En el momento actual, el Estado mismo debe redefinirse para incorporar de manera amplia a la ciudadanía y sus organizaciones y agrupaciones o desaparecer de manera definitiva. Un Estado conformado por grupos de presión, anónimos e impersonales, es en extremo débil ante los intereses de poderosos grupos financieros internacionales, ante la capacidad de organización de las mafias mundiales, ante la proliferación de empresas transnacionales y ante las redes de corrupción políticas en expansión. Por el momento, dejaremos de hablar del Estado para concentrarnos en nuestro tema y preguntar: ¿cuáles son los elementos que un nuevo orden constitucional pondría en el centro de la discusión nacional?

Si en lugar de hablar del Estado analizamos la dinámica de los sistemas políticos, encontraremos tres características distintivas que debemos considerar:<sup>4</sup> primero, la fuente de legitimidad del gobierno y las bases para que la autoridad de los dirigentes sea aceptada ampliamente; segundo, la proporción de miembros de la comunidad que influyen en las decisiones del gobierno; y tercero, el número de subsistemas sociales y el grado de autonomía relativa de cada uno.

---

<sup>4</sup> Véase Robert, Dahl, *Análisis sociológico de la política*, Barcelona, Fontanella, 1968, pp. 42 ss.



¿Nueva constitución o...

## 1.2. Sistema político: legitimidad y acceso al poder

Podríamos decir que consideramos que un gobierno es legítimo cuando puede contar con el apoyo de sectores importantes de la población para llevar a cabo o promover determinadas medidas de política pública: cuantas más personas o grupos apoyen las políticas del gobierno en turno, más legítimo será éste (y viceversa: cuantas menos personas apoyen las políticas del gobierno en turno menos legítimo será). ¿Cuál es la fuente que garantiza que el gobierno en turno sea apoyado?

Nuestro primer elemento para tomar en cuenta es entonces: ¿cómo se legitima usualmente el poder político en México? Hasta antes del triunfo de Fox, la legitimidad de cada gobierno se fundamentaba en la tradición instaurada por el Partido Revolucionario Institucional: “paz” social, estabilidad económica, no reelección y experiencia de gobierno. Esta legitimidad tradicional heredada se fusionó, en algunos sexenios, con el carisma de dirigentes como Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari. La tradición priísta se basaba en reglas no escritas (como por ejemplo: no asesinar para llegar al poder), en el mito del origen común y en la familia revolucionaria. Las fuentes de apoyo para los gobiernos priístas eran las corporaciones del partido, organizadas como grupos cerrados identificados con un credo particular, y unidas por la común adhesión a un dirigente máximo, en ocasiones vitalicio (caso Fidel Velásquez).

La forma típica de forjar la identidad priísta, la familia revolucionaria, se vincula con un segundo elemento del sistema político: la proporción de miembros de una comunidad determinada que influyen en las decisiones del gobierno. Desde la lógica corporativa, los miembros de la comunidad que influían en las decisiones no eran las bases (o las masas), sino quienes ocupaban la cúpula de las estructuras corporativas (la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Revolucionaria Obrero Campesina, el Congreso del Trabajo, la Unión de Organizaciones Populares o Confederación Nacional de Organizaciones Populares, etc.). Bajo la tradición autoritaria priísta, las decisiones se concentraban en unas pocas cabezas: el presi-

dente decidía en la cerrazón de sus oficinas, con los miembros de su gabinete y con los comités de asesores para después negociar lo negociable con los sectores corporativos priístas. El gran tamaño de las corporaciones y de la burocracia estatal fueron algunos de los factores que hicieron de las grandes organizaciones políticas, oligarquías gobernadas por unos pocos.

La lógica de acceso al poder era la camarilla: un grupo cerrado, usualmente con un credo o ideología particular, unido por relaciones de lealtad fijas, y que al llegar al poder se constituía en facción, esto es, en un grupo de personas que buscan realizar desde el poder público fines individuales que en muchas ocasiones son contrarios a los designios nacionales y a las necesidades sociales. El fundamento de la camarilla y del gobierno basado en camarillas es el personalismo: cada grupo político (como una comunidad autárquica) se cierra en torno a la figura de un líder, caudillo o dirigente máximo, caracterizado por su estilo personal de gobernar. Cuando las camarillas se instalan en la administración pública y en el gobierno, personalizan los cargos públicos, “haciéndolos” que se identifiquen con la persona que los ocupa (de ahí el que muchos dirigentes se perpetúen en el poder). La política, desde la lógica de la camarilla, se vuelve profundamente cooperativa: “La regla fundamental entonces es: ya no sólo no hay conflicto alguno entre nosotros [los priístas], sino que nuestros intereses son idénticos o tan imbricados entre sí que juntos ganaremos o perderemos, por lo cual la mejor estrategia es la cooperación total y evitar el conflicto”.<sup>5</sup>

La administración Fox se enfrenta al reto de –en tan sólo un sexenio– realizar un profundo cambio cultural, mediante nuevas instituciones que revitalicen el quehacer político. La inercia ha llevado al gobierno actual a fincar su legitimidad a la manera priísta: a partir del carisma del presidente y mediante un estilo personal de gobernar que lejos de romper la lógica de las camarillas cerradas la ha conservado bajo una versión empresarial. La fuente de legitimidad de Fox es tanto su estilo personal y su carisma, como el manejo exitoso de indicadores económicos macro y de cifras relativas a la seguridad pública y

---

<sup>5</sup> Robert Dahl, *La poliarquía*, México, REI, 1993, p. 141.

## ¿Nueva constitución o...

a la seguridad nacional (combate al narcotráfico, sobre todo). El gobierno de Fox no es legítimo porque se apegue estrictamente a la ley, sino porque las personas creerán en él mientras mantenga la paz posrevolucionaria, controle las crisis económicas, y haga que México sea más “seguro” y próspero.

Pero esta forma de legitimidad no es la que muchos buscan cuando hablan del Estado de derecho, como aquel modelo ideal en el que la ley rige por encima de los intereses de las personas particulares. Nos encontramos aquí ante el primer problema al que se debe enfrentar tanto la ingeniería constitucional como el debate en torno a una nueva Constitución: que la ley, en México, puede interpretarse a discreción, porque así lo ha sido durante décadas, y que la Constitución puede violarse sistemáticamente. Pero, ¿es posible que esta situación se pueda corregir con una revisión integral de la Constitución? Tal vez, pero esto implicaría limitar las facultades discrecionales de los poderes públicos, para interpretar y aplicar la ley a su antojo y afinar los mecanismos para controlar<sup>6</sup> que ninguna ley, norma o acto del poder público viole lo que está establecido en la Constitución.<sup>7</sup>

Lo que seguramente no se podrá lograr con una revisión a nuestra Constitución es cambiar la cultura política nacional, afianzada durante décadas en la camarilla, el nepotismo, el amiguismo y el compadrazgo políticos. La propuesta de instituir un servicio civil de carrera representa un intento por formar una nueva clase política dispuesta a servir a la población (en lugar de dispuesta a servirse de la población), pero esto quizá tomará décadas. Mientras tanto, se han favorecido auditorías y controles más estrictos para detectar posibles actos de corrupción por parte de los funcionarios. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, la única forma de hacer frente a la corrupción es detectándola, pero nuestra cultura política sigue siendo la del grupo cerrado: a pesar de que se ha garantizado la democra-

<sup>6</sup> Para una teoría elaborada del control de la constitucionalidad, véase Elisur Arteaga Nava, *Tratado de derecho constitucional*, México, Oxford University Press, 1999, vol. 4, pp. 1317 ss.

<sup>7</sup> El principio de la supremacía constitucional está establecido en el artículo 133 de nuestra Constitución, véase Eduardo García Maynez, *Introducción al estudio del derecho*, México, Porrúa, 1992, 43a. Ed., p. 87.

cia procedimental (electoral), las políticas públicas se siguen gestando bajo un modelo autoritario en que la comunicación se da en una sola vía.

### *1.3. Sistema político: autonomía y autogobierno*

Una tercera variable para tomar en cuenta es la autonomía relativa de los subsistemas sociales, la cual se ha considerado como un indicador de la modernidad: a mayor autonomía de los subsistemas sociales más modernizada será una sociedad determinada. Podríamos considerar otra fórmula para explicar esto: cuantas más posibilidades tiene un subsistema social determinado para gobernarse a sí mismo, comprometiendo menos recursos para “gestionar” su futuro, mayor será su grado de autonomía.

Consideremos el caso de la familia. Una familia logra mayor autonomía si es capaz de gestionar, en su seno, las condiciones para su conservación y desarrollo, si puede sostenerse a sí misma (y a sus integrantes), si les garantiza seguridad, identidad, afecto y el contacto con un entorno donde se desarrollan intensivos procesos de socialización. En la medida en que una familia no puede garantizar seguridad o sustento a sus integrantes, pierde autonomía. Algo similar pasa con los restantes subsistemas sociales: si la economía no puede garantizar que se mantenga constante la capacidad de pago entonces pierde autonomía (usualmente el gobierno interviene para rescatar la economía imprimiendo más dinero o pidiendo créditos); si el subsistema derecho no puede validar la ley entonces se puede enfrentar una situación de crisis constitucional; si la educación no promueve la capacidad de aprender, entonces enfrenta una situación de estancamiento o decadencia relativa, etcétera.

En el caso de México, la autonomía de las organizaciones y subsistemas sociales se ha visto limitada en varios ámbitos que van desde la represión, la violencia y la coacción ejercidas por las autoridades, hasta la excesiva reglamentación como mecanismo de control político y el papeleo también excesivo como medio de control burocrático. En los medios quienes más se han hecho escuchar son los empresarios; su queja constante



## ¿Nueva constitución o...

son los trámites interminables y la corrupción de las autoridades, pero existen otros sectores de la sociedad cuyas voces no se han escuchado todavía. La política en México ha contaminado diversas esferas de la vida privada, promoviendo en muchas ocasiones un estilo de vida oportunista, dirigido por el afán de poder ilimitado: la falta de talento de los gobernantes suele compensarse mediante vínculos de lealtad con grupos de interés poderosos. La política competitiva ha sido usualmente superada por la política de la dádiva y la cooperación cómplice.

Por ende, la política, en lugar de proporcionar opciones de libertad y ámbitos para la toma de decisiones responsables, suele oprimir con sus imperativos de poder y control a las organizaciones sociales, limitando su capacidad de organización. La política paternalista ha promovido una actitud de espera y de búsqueda de beneficios gratuitos, mientras que el autoritarismo y el proteccionismo han minado la capacidad emprendedora de las personas y la seguridad en que las interacciones sociales se afianzan en la confianza y en el compromiso recíprocos.

## 2. Sistema político y régimen

El centro del debate en torno a una nueva Constitución podría ser la forma de gobierno (o más precisamente el régimen político). Según lo establece nuestra Constitución, la forma de gobierno de los Estados Unidos Mexicanos es la de una República, representativa, democrática y federal. Desgraciadamente, la Constitución contempla la forma, pero ésta no se ha realizado en la práctica. La defensa de la República como alternativa al gobierno monárquico fue emprendida en el siglo XVII por Harrington, Milton y Sydney; algunos de sus principios eran: “la constitución escrita, la elección de los magistrados, la separación de poderes, las garantías de la libertad religiosa y la educación popular a expensas del erario público”.<sup>8</sup> En su forma original, la República suponía que el Estado era una posesión común de todos sus ciudadanos y que su existencia se legiti-

---

<sup>8</sup> Véase George H. Sabine, *Historia de la teoría política*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 383.

maba sólo si daba a los miembros de éste las ventajas que se derivaban de la ayuda mutua y de un gobierno justo; la república es la cosa del pueblo (*res-publica*), en ella la autoridad surge del pueblo que, como organización autónoma, define los poderes necesarios para su conservación y existencia: *Salus populi suprema lex est* [la salud del pueblo es la ley suprema].

Este sentido de la República se ha visto contaminado en México por un fenómeno que podemos denominar privatización de lo público. Los servicios y bienes públicos deberían ser precisamente públicos por no ser propiedad de nadie, pero la práctica desmiente este carácter público de los bienes y servicios proporcionados por el “Estado”: los servidores públicos, que viven de los recursos del pueblo, pueden utilizar estos recursos en su propio beneficio. Pero más allá todavía, nuestra historia y tradiciones se han visto contaminadas por la forma como el partido oficial interpretó los designios de la Nación mexicana; esta interpretación totalmente arbitraria de la voluntad libre y soberana de un pueblo ha violentado de la manera más terrible los ideales de la República.

Nuestra “república” debería ser representativa. ¿Qué significa esto?, idealmente que nuestros gobernantes deberían ser electos por la mayoría de los ciudadanos, que podrían ser removidos en cualquier momento por fallar al mandato constitucional que prometen cumplir y hacer cumplir con su toma de protesta, y que nuestros representantes populares (sean diputados, senadores, alcaldes, regidores o síndicos) gobiernen para todos y no sólo para algunos. Los ideales se confrontan con la cruda realidad: si bien se ha garantizado que el fraude electoral quede reducido a su mínima expresión, lográndose así mayor credibilidad en las instituciones electorales y la alternancia en el poder, nuestros diputados, senadores, y gobernantes locales suelen representar los intereses de sus partidos (a esto algunos le llaman partidocracia). Habría que preguntar al lector si conoce el nombre de su diputado local y si alguna vez ha tenido contacto con él. Desgraciadamente, el sistema de representación proporcional mediante listas plurinominales acarrea ciertos costos políticos, ya que suele llevar al Congreso de la Unión

## ¿Nueva constitución o...

a representantes del partido y no del pueblo, y puede polarizar aún más el escenario de partidos.

El problema más arduo de enfrentar es el de nuestra nascente democracia. Podemos decir que, por ahora, tenemos una democracia procedimental o electoral, pero aún no instalamos el estilo de vida democrático, como práctica cotidiana. Quizá uno de los más grandes obstáculos para nuestra democracia es la muy desigual distribución de la riqueza, la cual obra también como factor de desigualdad en el acceso al poder político, a la educación, a la cultura, a la estabilidad familiar y a la salud. Una democracia en la que diariamente millones de personas se ven en situación de extrema pobreza no tiene muchas posibilidades de sobrevivir en el largo plazo.

El problema de la mala distribución del ingreso y del acceso al poder y a los bienes sociales y culturales nuevamente nos lleva al fondo de lo que debería estar en el debate en torno a una nueva Constitución: ¿qué instituciones gubernamentales garantizarían una sociedad justa? Hasta el momento actual, la administración Fox considera que la justicia social sólo podrá lograrse si se aprueba la reforma fiscal en el Congreso, en los términos en los que ha sido elaborada por los tecnócratas. Pero, los tecnócratas son insensibles al dolor, al sufrimiento y a la miseria humanas, sólo les preocupa lo que pueda desestabilizar o poner en riesgo al sistema: su cálculo de la riqueza se basa en frías cifras y no en la candente y cruda realidad. A pesar de sus elaborados diseños, existe un grave riesgo que se les escapa de las manos, debido a su falta de sensibilidad humana: la cantidad de resentimiento y frustración acumulados por décadas, que como pasivos sociales crecen cada día y vuelven cada vez más difícil la reconciliación, el diálogo y la estabilidad política y social.

Desgraciadamente, ninguna reforma fiscal puede, por sí misma, “producir” una sociedad más justa. Según John Rawls, experto en cuestiones de justicia, una sociedad justa requiere al menos lo siguiente:<sup>9</sup> una Constitución justa que asegure las

---

<sup>9</sup> Véase John Rawls, *Teoría de la justicia*, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, 2a. ed., p. 257

libertades de una ciudadanía igual, un proceso político conducido como un procedimiento justo para elegir entre varios gobiernos y para promulgar una legislación justa, una justa igualdad de oportunidades de enseñanza y cultura a personas similarmente capacitadas y motivadas, la aplicación de esquemas para la igualdad de oportunidades en las actividades económicas y en la libre elección de una ocupación, y la garantía de un mínimo social ya sea por asignaciones familiares o mediante subsidios especiales (enfermedad y desempleo o a partir de un impuesto negativo sobre la renta).

Dadas estas condiciones, que no están del todo garantizadas en México, un gobierno justo debería dividirse en cuatro ramas,<sup>10</sup> con varias agencias o actividades encargadas de conservar ciertas condiciones sociales y económicas mínimas. Las primeras dos ramas se relacionan con la actividad económica: en la primera, se fomenta un mecanismo de mercado competitivo y se definen los derechos mínimos de propiedad; en la segunda, se promueve un modelo económico de equilibrio que sea eficaz y mediante el cual se pueda hacer frente con éxito a diversos escenarios de crisis. Las dos últimas ramas se relacionan con la dinámica social: en la primera, el gobierno garantiza un mínimo de bienes sociales que permitan cierto nivel de satisfacción relativa de necesidades; en la segunda rama, se realiza una distribución más justa de la riqueza mediante impuestos y ajustes a los derechos de propiedad.

Cuando se habla de una nueva Hacienda Pública (re)distributiva se reduce el tema de la justicia social a un aspecto de la última de las ramas del gobierno mencionadas (la que tiene que ver con la justa distribución de la riqueza a partir de un nuevo sistema de impuestos). Pero, ¿qué pasa con el resto de las agencias que deben darse en una sociedad justa?, ¿dónde queda la revisión y los ajustes a los derechos de propiedad que son también parte de la justicia social? Una revisión integral de la Constitución difícilmente permitirá lograr un nuevo diseño institucional para una nueva sociedad más justa, ya que para

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, pp. 258-262.



## ¿Nueva constitución o...

esto quizá se requieran cambios en los consensos sociales básicos que están en el fondo de nuestra Constitución.

Ante las grandes injusticias sociales que la Constitución vigente no nos permite enfrentar, poco sentido tiene ahora preguntarnos por el federalismo cuando la mayor parte de la población sigue sufriendo por la falta de bienes y servicios públicos, por la falta de representación auténtica y por los dilemas y ambigüedades de nuestra nascente democracia: el sentido original del federalismo, como pacto federal, se ve lesionado por el centralismo todavía operante, pero aún más por la poca solidaridad entre estados que se encubre detrás del nombre de pacto federal. México se nos sigue dividiendo ante los ojos, día a día, pero esta división no puede reducirse al conflicto entre indígenas y mestizos, ya que se da en varios niveles: entre estados del norte y del sur, entre ricos y pobres, entre grandes poseedores de tierra y desterrados, entre creyentes y jacobinos a ultranza, entre sectas y credos religiosos, entre familias y hermanos, entre víctimas y victimarios, entre ganadores y perdedores, entre exclusores y excluidos, etcétera.

Cuando nos enfrentamos al tema de la unidad nacional percibimos con claridad que no compartimos una cultura política común, sino ante todo patrones informales y subculturales difusos de convivencia, y usos, costumbres y tradiciones, los cuales garantizan que, a pesar de la pobreza, la opresión y la injusticia, florezcan comunidades de vida en las que se gestan formas alternativas a la cultura vigente, que no ha dejado del todo de ser autoritaria, paternalista y ajena al sufrimiento humano y a los imperativos de la caridad.

### 3. Constitución, soberanía y unidad nacional

Tres escenarios se han contemplado en cuanto al futuro de nuestra Constitución Política: en el primero, la observación estricta de la ley conducirá idealmente a un Estado de derecho pleno, pero en este escenario también se pueden provocar grandes injusticias: *summum ius summa iniuria* (aplicar con rigor el derecho causa grandes injusticias); en el segundo, la revisión y la reforma constitucional integral llevaría a adecuar la norma a la coyuntu-



ra actual; en el último, habría que convocar a un nuevo Congreso Constituyente para que redactara una nueva Constitución.

Puesto que el poder y las decisiones políticas se concentran en pocas manos, que se sigue recurriendo al carisma y a los medios de masas para obtener apoyo incondicional, y que las decisiones y criterios políticos prevalecen sobre las necesidades sociales, podemos ver con escepticismo tanto el principio de observar con rigor la ley como el intento de adecuar la Constitución a los tiempos actuales. Parece que la adecuación de la norma constitucional no pretende mayores libertades políticas, ni garantizar más derechos sociales, sino ante todo garantizar mayores libertades económicas. Los “propietarios” del modelo neoliberal saben que una mayor garantía de libertades políticas y sociales puede significar mayores demandas de participación e inclusión: la simetrización de las relaciones de poder representa un riesgo para el modelo de desarrollo vigente, ya que éste pretende sostener la riqueza de unos pocos sobre la pobreza de muchos. La esencia del desarrollo nacional es, bajo esta óptica, la acumulación, la estratificación de la sociedad y la garantía de una derrama económica futura que garantice bienestar para todos.

El modelo económico pretende lograr la acumulación de capital no mediante saltos tecnológicos, ni gracias al aumento de las capacidades de las empresas, sino a partir de incrementos constantes en la productividad que permitan una mayor tasa de explotación. Bajo un esquema de mayor productividad, el gran ganador es el factor capital y no la fuerza de trabajo (que sólo recibe aumentos muy por debajo de su rendimiento). El modelo al que parece apuntarse es uno que garantice la realización libre de operaciones mercantiles en varios niveles, de transacciones libres entre personas, de opciones ilimitadas de consumo y ocio personalmente asumidas, y de control de la apariencia como mecanismo de autenticidad en las presentaciones de las personas en la vida cotidiana.<sup>11</sup> Este modelo no garantiza cooperaciones estables y recurrentes, sólo operacio-

---

<sup>11</sup> Véase Erving Goffman, *La presentación de la persona en la vida cotidiana*, Buenos Aires, Amorrortu, 1997, pp. 29 ss.

## ¿Nueva constitución o...

nes monológicas, desvinculadas, aunque libres en apariencia. Cuando se habla de adecuar la Constitución, en el fondo lo que se pretende es amoldarla al modelo de desarrollo globalizador y excluyente. No se busca ampliar los derechos ciudadanos con respecto al régimen, sino los derechos de propiedad entre sujetos guiados por su propio interés, garantizando así la imparcialidad de las contrataciones, la asignación aparentemente justa de recursos y la eficiencia de las empresas.

La revisión integral de la Constitución es un escenario funcional al nuevo orden económico y político que se está gestando. La sociedad está fuera de este escenario porque su participación se limitará a consultas que, no está de más decirlo, han probado su limitada efectividad en más de una ocasión. Tampoco parece adecuado convocar plebiscitos o referendos con preguntas manipuladas. La revisión integral sería ante todo un proceso de negociación cerrada entre élites, que quizá produzca una Constitución revisada más justa y ordenada, pero que no garantizará, sin duda, que el pueblo de México sea soberano y se dé a sí mismo sus propias leyes.

El principio de la soberanía popular ha sido sistemáticamente traicionado en México. Si aún cabe hablar de soberanía, no es como una defensa ante las potencias extranjeras o ante el enemigo gringo, ni como un acto de ocultamiento de la violación sistemática de derechos humanos ante observadores internacionales. La soberanía no tiene sentido ya como frontera territorial rígida, ya que los flujos mundiales de comunicaciones, personas, noticias y capital hacen temblar las fronteras, mientras que el riesgo ecológico, el terrorismo y el narcotráfico exigen acciones multilaterales, más allá de toda frontera.

La doctrina clásica dice que la soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo, pero:

En el caso mexicano, cuando menos desde el punto de vista histórico, no se ha dado ese presupuesto... en relación con el titular temporal de la soberanía; los hechos demuestran que el fenómeno se dio de otra manera; en el sistema político mexicano la soberanía formal y material ha sido asumida, usurpada y ejercida de manera ordinaria por una facción armada triunfante, que ha impuesto a un constituyente un criterio de organización que previamente ella ha

fijado; las cúpulas de las facciones vencedoras han sido las que han determinado las formas de estado y gobierno que deben adoptar e instrumentar esas asambleas constituyentes que eufemísticamente se han denominado soberanas. Sostener que en el caso mexicano el pueblo ha depositado en forma transitoria su soberanía en esas asambleas es pasar por alto la realidad.<sup>12</sup>

La administración Fox, desgraciadamente, parece pretender lo mismo que ya se ha hecho, y que tantas injusticias ha acarreado: que la nueva facción vencedora determine la forma de organización política, económica, cultural y social de México bajo la Constitución revisada integralmente. La ley (humana) no es inocente ni está exenta de aberraciones o errores; con la ley en la mano se pueden cometer las peores injusticias y aberraciones, basta con voltear a los Estados Unidos para ver un sistema punitivo que legitima matar a los delincuentes y una mitología cultural que permite liquidar a los “enemigos” del sistema. La única forma de evitar que la Constitución se vuelva de nuevo un instrumento para oprimir y someter es convocar a una gran movilización social en favor de una nueva Constitución.

La convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente no es idea de desquiciados, si no quizá la única manera para garantizar que la soberanía sea ejercida por el pueblo de México. Desde luego, es posible convocar a un nuevo Congreso y elaborar una nueva Constitución entre un grupo cerrado, pero también es posible movilizar a los grupos y organizaciones sociales para generar mecanismos de representación que permitan que, en un Congreso Constituyente, tengan voz quienes tradicionalmente han sido silenciados. Habría que garantizar que todos estuvieran representados y que se pudieran escuchar las voces de quienes tienen algo que decir. Una nueva Constitución, bajo una estrategia ambiciosa de comunicación y movilización sociales podría fungir como factor de unidad para el pueblo de México y como el baluarte de una nueva cultura política plural, democrática, abierta, justa y libre.

Muchos deseáramos que en nuestra Constitución apareciera, en algunos de los artículos principales o incluso en un

---

<sup>12</sup> Elisur Arteaga Nava, *Tratado de Derecho Constitucional*, op. cit., vol. I, p. 13.

## ¿Nueva constitución o...

proemio, palabras como las siguientes: “Nosotros, el pueblo de México, por nuestra voluntad soberana, hemos decidido constituirnos...”. La Constitución es la norma suprema de una nación, su ley o norma fundamental (*grundgesetz*); cada Constitución ha anunciado el inicio de una nueva era o el principio de la libertad de una nueva nación. Resulta curioso constatar que Fox es un presidente ambicioso, pero sus actos desdichan constantemente sus altos ideales. Si hubiera sido consecuente en su discurso del 5 de febrero hubiera concluido que ante el escenario de cambio epocal, se da la necesidad de convocar a los mexicanos para construir juntos una nueva ley suprema.

A pesar de todo resulta hasta cierto punto explicable la precaución de Fox. Por un lado, su administración se desarrolla en un escenario de gobierno dividido, en el que la Presidencia se enfrenta a la posible oposición del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales para llevar a cabo reformas trascendentales (ya que en estas instancias no cuenta con mayoría de ningún tipo); pero, por otro lado, el pacto de transición entre Zedillo y Fox y los acuerdos secretos negociados, junto con las alianzas hechas con empresarios y grupos políticos de la oposición, limitan fuertemente la capacidad de maniobra del actual gobierno. Si a esto sumamos el entorno de poco crecimiento económico, podremos constatar que Fox tiene una enorme cantidad de recursos comprometidos y, por ende, goza de escasos márgenes para actuar y de reducidos ámbitos de libertad.

Desgraciadamente, parece que muchos tendremos que esperar otro sexenio para ver realizado el México de nuestros anhelos: más justo y ordenado, con gobernantes más responsables y honestos, con autoridades creíbles y legítimas, con leyes que promuevan la justicia social y el respeto incondicional a los derechos universales del ser humano. Por el momento, las grandes esperanzas en un proceso político que reconcilie públicamente a México y a los mexicanos aguardarán en el corazón de muchos de nosotros, esperando que un gobierno con decisión y libre de cláusulas de negociación secretas con el viejo régimen, nos convoque para la paz, la justicia y la construcción mediante el diálogo del bien común y del nuevo orden social.